

Santiago, veintiuno de marzo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ordenó dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el de nulidad que presentó con la finalidad de invalidar la de base que hizo lugar a la demanda de cobro de prestaciones.

Segundo: Que el recurso de unificación de jurisprudencia, procede contra la resolución que falle el de nulidad para el caso en que “respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo. Asimismo, del tenor de lo dispuesto en su artículo 483-A, esta Corte debe controlar su oportunidad, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia y acompañarse copia del o los fallos que se invocan como argumento del arbitrio en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho que se propone uniformar consiste en determinar *“la interpretación de los artículos 163 y 172 del Código del Trabajo y la subyugación que efectúa el Derechos del Trabajo a la Ley del Contrato y sus normas de interpretación, y que por el hecho de pactarse una indemnización convencional por años de servicio ello deja sin efecto los topes legales y debe necesariamente invertirse la regla que se ha fallado en el pasado, esto es, que toda renuncia a topes legales debe ser manifestada de forma expresa y categórica”*.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste primero una sentencia la dictada por la Corte en los autos Rol N° 3033-2002, en que se estableció que no hubo una referencia expresa en el Reglamento Interno de la Empresa respecto a acordar que las indemnizaciones por término de contrato estaría exenta del tope legal de 90 U.F. prevista en el artículo 172 inciso tercero del Código Laboral, para lo que se requiere disposición contractual expresa y explícita.

En segundo lugar, aparejó la sentencia pronunciada por la Corte en el rol N° 3692-2002, en la que se dio validez al pacto indemnizatorio contenido en el



contrato de trabajo, conviniendo una indemnización por el tiempo servido superior a los límites máximos establecidos en la ley para el monto de la remuneración sobre la cual se calcula, con un complemento de 150 días de la última remuneración bruta mensual, y por haber estado vigente la relación contractual más de 3 años, un incremento de 30 días de la última remuneración bruta mensual por cada año y fracción de seis meses adicionales de servicios ininterrumpidos a la empresa.

En tercer lugar, se trajo a colación el fallo dictado por la Corte en los autos rol 2209-2002 en el que se razonó en que por la aplicación práctica que se había dado al convenio colectivo con anterioridad, la intención de las partes fue de excluir de la base de cálculo para las indemnizaciones a las regalías.

Y, por último, se acompañó la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de San Miguel en el rol N° 89-2011, en la que se resolvió que el pacto sobre indemnización incluido en el contrato de trabajo se refiere a la indemnización por años de servicio sin el tope de 90 unidades de fomento previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo.

Quinto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada. Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Sexto: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito, tal exigencia no aparece observada aquí, desde que la situación resuelta en esta causa no es equiparable con la que sustenta el fallo de contraste, puesto que, como se advierte de su sola lectura, la decisión que ahora se impugna, razonó respecto a la correcta aplicación de la normativa laboral en relación al convenio colectivo suscrito el primero de mayo de 2019, en el que se estipuló que se pagará a los trabajadores con más de 20 años en la empresa un 50% de la remuneración mensual por cada año de servicio, por lo que le corresponde al actor el pago de la indemnización sin el tope que establece el artículo 163 del Código Laboral. Sin



embargo, los pronunciamientos contenidos en las sentencias que fueron acompañadas se sustentan en razonamientos distintos, los que dicen relación con la aplicación del tope de 90 U.F. previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo y la decisión de excluir de la base de cálculo a las regalías en virtud, por la aplicación práctica que se había hecho del convenio colectivo con anterioridad.

Séptimo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el demandado, puesto que la necesidad de uniformidad de la materia y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y disposiciones citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandado contra la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Al escrito folio 19833: estése a lo resuelto.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°65.360-21

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., ministros suplentes señor Mario Gómez M., señora Eliana Quezada M., y los Abogados Integrantes señor Enrique Alcalde R., y señora Carolina Coppo D. No firman los ministros suplentes señor Gómez y señora Quezada, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado ambos su periodo de suplencia. Santiago, veintiuno de marzo de dos mil veintidós.





En Santiago, a veintiuno de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

